

El 23-F fracasó, ahora vivimos otro golpe

El gobierno de Sánchez ha publicado el 25 de febrero 153 documentos clasificados como secretos sobre el frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Han transcurrido 45 años, los golpistas fueron juzgados y cumplieron sus condenas. Esta desclasificación parcial de documentos seleccionados con arbitrariedad por Sánchez apenas añade algo a lo ya conocido ni completa la visión histórica del conjunto de hechos del intento de golpe porque, entre otros, no incluye los referentes a la previa reunión de Lérida (Armada con el socialista Múgica) para preparar un gobierno de concentración postgolpe con socialistas y comunistas.

Por ello, hemos interpretado que el gobierno intenta jugar una de sus bazas de distracción de la opinión pública por los graves problemas que le agobian porque los documentos acreditan la contundente actuación del Rey Juan Carlos en su oposición al golpe impartiendo órdenes a los mandos militares para no seguirlo. Así pues, el gobierno utiliza al Rey Juan Carlos otra vez como cortina de humo (ahora dicen que para acreditarlo y no para desacreditarlo) para desviar la atención de la opinión pública de los numerosos escándalos (presunta corrupción, amaño de adjudicaciones, los recientes del DAO) y de la incompetencia negligente de los gestores (apagón, descarrilamiento de trenes).

Sin embargo, este mal recuerdo del golpe de Estado frustrado del 23-F contra la Constitución y la Democracia nos ha colocado ante la amarga realidad de nuestra España de 2026 en la que el presidente Sánchez está ejecutando un continuo e inquietante cambio de régimen violando el espíritu de concordia y la letra de la CE 1978. Sánchez alcanzó en 2018 la presidencia del gobierno con el apoyo de los comunistas, separatistas y filoetarras y está incumpliendo la Constitución: aprobó la amnistía para los golpistas separatistas, cedió sin acuerdo parlamentario el Sáhara Occidental, no ha presentado a las Cortes los Presupuestos Generales del Estado para 2024, 2025 y 2026, y ha hecho perder la confianza en el sistema democrático español y en el Estado de Derecho.

Así pues, podemos comparar dos situaciones. En 1981 el Rey Juan Carlos frenó y frustró el golpe del 23-F con su contundente intervención, pero, desde 2018, el gobierno de coalición de Sánchez actúa para destruir nuestra Constitución democrática y el Estado de Derecho, imitando los regímenes populistas dictatoriales de Venezuela, Colombia o Bolivia.

El gobierno de Sánchez ha conseguido la degradación de la Constitución de 1978 mediante el abuso y extralimitación del poder ejecutivo para tratar de conseguir concentrar los tres poderes del Estado. Legisla por Real Decreto Ley (más de 150), carece de apoyo parlamentario perdiendo continuamente votaciones, intenta someter al resistente Poder Judicial y acosa económicamente a los medios de comunicación libres. Y, controla las instituciones (el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Banco de España, la CMC, en breve la AIREF) que deben ser constitucionalmente independientes. Es de total gravedad en una

democracia la prórroga sucesiva de los presupuestos sin permitir el control parlamentario de las cuentas públicas. Con ello, cabe afirmar que vivimos en España en una aparente democracia porque el sistema carece de instituciones y mecanismos efectivos de control del gobierno y que le pueda obligar a dar transparencia de las cuentas y sus actos.

Ni cuando dice que da transparencia, acierta el gobierno, porque lo ha hecho selectiva y arbitrariamente mientras la Ley de Secretos Oficiales 9/1968 establece el principio de integridad, salvo las excepciones. Por el contrario, no da transparencia (los hace secretos) a sus abundantes gastos y viajes del Falcon a los países del Caribe, a pesar de la reiterada petición de diversos medios de comunicación al amparo de la Ley 19/2013 de Transparencia.

Por ello los ciudadanos que deseamos disfrutar de la seguridad del Estado de Derecho debemos alertar a nuestros conciudadanos de las tretas seguidas que nos llevan peligrosamente a otra "era de oscuridad política" y debemos denunciar este proceso de golpe que quiere enterrar la Constitución. Pocos elementos de defensa tenemos los ciudadanos a nuestro alcance, pero hay que utilizarlos: la denuncia, la manifestación pública y el ejercicio del derecho de voto.

Carlos Entrena Palomero
Presidente del Club Liberal Español